

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: EJECUTIVO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-003-2021-00299-01 (E2-24-002)
Accionante: DORA STELLA ARRUBLA RUIZ
Accionado: AFP PORVENIR S.A.
Procedencia: JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Asunto: MANDAMIENTO DE PAGO – REQUISITOS FORMALES TÍTULO EJECUTIVO

En Medellín, a los veintidós (22) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-003-2021-00299-01 (E2-24-001), instaurado por DORA STELLA ARRUBLA RUIZ en contra de la sociedad AFP PORVENIR S.A., con el objeto de decidir el recurso de apelación formulado por la administradora del RAIS contra el auto del 27 de julio de 2021 proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, con el que resolvió librar el mandamiento de pago.

1. ANTECEDENTES

La señora DORA STELLA ARRUBLA RUIZ, actuando a través de gestor judicial, promovió demanda ejecutiva en contra de la sociedad AFP PORVENIR S.A. en procura de obtener el pago de la suma de \$ 111.160.760 por concepto de intereses moratorios, junto con el valor de \$ 11.928.464 por las costas fijadas dentro del proceso ordinario laboral que cursó entre las mismas partes, la indexación e intereses de mora.

Como fundamento de sus pedimentos, informó que mediante sentencia del 31-agos-2012 se resolvió *“condenar a la sociedad BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. a reconocer y pagar en su favor la suma de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS \$ 17.731.533, por concepto de retroactivo de la pensión de sobrevivientes causado desde el día 02 de mayo del año 2010, hasta el 31 de agosto de 2012, condenando de igual forma a cancelar una mesada pensional equivalente a la suma de \$ 566.700, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre y los incrementos de ley”*; además de aprobarse la liquidación de costas en el valor de \$ 11.928.464.

Advirtió que, la ejecutada el 30 de octubre de 2020 pagó la suma de \$ 98.613.020, aclarando que con esta cifra no cubre la totalidad de las condenas impuestas en sede judicial, en la

medida en que, dicho guarismo corresponde únicamente al capital adeudado por concepto de retroactivo pensional, permaneciendo insolutas las obligaciones atinentes a los intereses de mora y las costas procesales; por lo que considera le asiste derecho a sus reclamaciones.

1.1. Trámite de primera instancia

El cobro coactivo referido correspondió al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, el que mediante auto del 27-jul-2021 (doc.04, carp.01), anejándose copias auténticas de las decisiones judiciales que se profirieron dentro del marco del proceso ordinario laboral seguido entre los aquí contendientes y radicado bajo el número 05001-31-05-003-2011-01051-00 (págs.09 a 34 y 39 a 63, doc.02, carp.01).

1.2. Decisión de Primera Instancia

El juzgador de instancia en auto del 27-jul-2021 (doc.04, carp.01), dispuso:

“Primero: Librar mandamiento ejecutivo en contra de PORVENIR S.A. y a favor de la señora DORA STELLA ARRUBLA RUIZ. Por la suma de \$ 21.473.702, por concepto del saldo adeudado por el concepto de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, liquidados hasta el 30 de octubre del 2020. Segundo: Se libra mandamiento por la suma de \$ 11.928.464.00 por concepto de las costas del proceso ordinario. Tercero: Las costas de esta ejecución (...).”

A ese respecto, el cognoscente de primer grado luego de relacionar las disposiciones legales que reglamentan los títulos ejecutivos, asentó que las providencias adosadas como título ejecutivo cumplen con los lineamientos normativos. Tras esa consideración, de la suma reclamada con apoyo en la información que reposa en el sistema de depósitos judiciales, dedujo la suma de \$ 89.687.058 de la cantidad de \$ 111.160.760 pretendida por la ejecutante, y de consiguiente, libró orden de pago por la diferencia resultante de \$ 21.473.702.

1.3. Recurso de Apelación

La administradora del RAIS accionada, se mostró inconforme con la decisión e interpuso recurso de alzada en orden a que se revoque la decisión adoptada en la primera instancia y, en consecuencia, se niegue el mandamiento de pago promovido por la señora ARRUBLA RUIZ.

A este propósito asevera en grandes líneas que, contrario a lo afirmado por la ejecutante, *“...desde el mes de diciembre de 2020 procedió a cumplir con la obligación que impone el auto que libra mandamiento de pago, en lo que respecta al pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la ley (sic) 100 de 1993 en donde se canceló a órdenes del despacho la suma de \$89.687.058,00”*; adosando el soporte de liquidación y constancia de pago de los intereses

moratorios. Asimismo, aseguró que el valor de las costas procesales fue consignado a órdenes de la agencia judicial de primer grado y, por ende, concluye que no existe obligación insoluta o pendiente de cumplir por parte de su representada y en favor de la señora DORA STELLA ARRUBLA RUIZ.

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación fue admitido por esta corporación el 29 de enero de 2024 (doc.02, carp.02), y se corrió traslado a las partes en el mismo proveído para que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo del caso; oportunidad en la cual los extremos litigiosos guardaron silencio.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la AFP PORVENIR S.A. advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se circunscribirá a los puntos de inconformidad materia de alzada, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala, se contrae a determinar la razonabilidad del ejercicio ponderativo realizado en sede de primera instancia al librarse el mandamiento de pago, en lo que atañe al pago total de la obligación que invoca la AFP PORVENIR S.A y conforme lo señalado en las reglas contenidas en las disposiciones que regulan la materia.

2.2. Sentido del Fallo – Tesis de la Sala

La Sala confirmará la decisión impugnada, en atención a que, ciertamente concurren todos los presupuestos formales en la conformación del instrumento aducido como base compulsiva, en tanto las providencias judiciales que acompaña a la demanda comportan una obligación clara, expresa y actualmente exigible en favor de la señora DORA STELLA ARRUBLA RUIZ y a cargo de la AFP PORVENIR S.A. De tal suerte que, con arreglo a lo previsto en el artículo 443 del CGP, las discusiones que se promuevan en derredor de la extinción de la obligación deberán surtirse en la etapa de decisión de excepciones de mérito y no antes, por los motivos que se expondrán a continuación.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

Puestas así las cosas, lo primero que relieves la Sala para resolver el escollo que plantea el asunto litigioso, es que el fin último de los procesos ejecutivos no es otro que la completa satisfacción por vía coactiva de las obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, que consten *“en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme”*¹; por lo que cristalino se muestra que las actuaciones judiciales de ejecución sólo terminan por el cumplimiento o pago total de la obligación respectiva.

De lo expuesto fluye con claridad que, los títulos ejecutivos deben gozar de dos clases de condiciones: formales y sustanciales. Las primeras, aluden a que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación sean: (i) auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva, o de decisiones que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme, perspectiva desde la cual hay que considerar que el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un sólo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos.

Entretanto, las condiciones sustanciales, apuntan a que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona, es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de dar, hacer, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. La obligación es clara cuando no da lugar a equívocos, respecto de la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación, y los factores que la determinan; es expresa, cuando de la redacción misma del documento, se avizora de manera nítida y manifiesta la obligación; y es exigible, si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, o si el plazo se hubiere extinguido o la condición se hubiere cumplido.

De suerte que, al momento en que el juzgador encuentre cumplidos los presupuestos arriba reseñados, librará mandamiento de pago con la orden al ejecutado para que cumpla dentro del término legal o judicialmente establecido la obligación a su cargo que se reputa insoluble²; decisión que, conforme lo ha aquilatado la Corte Constitucional en sentencia SU-041 de 2018, *“no sólo tiene la característica de una providencia mediante la cual se admite la demanda porque reúne los requisitos para tal fin y da inicio al proceso respectivo, tal como ocurre en la mayoría de procedimientos y especialmente en el de naturaleza cognitiva o declarativa, sino que además,*

¹ Artículo 100 del CPTSS, y artículo 422 del CGP

² Artículo 430 del CGP

establece la competencia del juez que lo profiere para analizar los documentos que contienen la obligación cuya ejecución se pretende, pues debe encontrar acreditada la existencia de un título ejecutivo, porque satisfacen las condiciones formales y sustanciales establecidas en la ley y puede generar su cobro al ejecutado”. -Subrayado intencional de la Sala-

En ese contexto, es el mandamiento de pago la decisión que cuantifica el monto de la obligación adeudada de forma inicial, o bien provisional, en la medida en que, lo allí dispensado es susceptible de ser modificado bien por solicitud de la parte ejecutante, bien por la prosperidad de uno cualquiera de los medios exceptivos que sean formulados por la convalidada a juicio; siendo oportuno señalar que en este último caso el artículo 446 del CGP dispone, “[e]jecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios”.

En relación con lo anterior, fluye con claridad en este estadio procesal que la discusión que actualmente plantea la administradora del RAIS en torno de la extinción de la obligación es abiertamente extemporánea por anticipada, en la medida en que, es la etapa de la audiencia especial de resolución de excepciones de mérito (art. 443 del CGP) el escenario idóneo donde se verificará el cumplimiento de la obligación pretendida por el ejecutante de cara a los pagos que alega la administradora del RAIS ejecutada para cubrir la totalidad de la obligación, ejercicio aritmético que, en tratándose de ejecución por sumas de dinero, debe someterse al marco y parámetros establecidos en el mandamiento de pago; de ahí que, resulte tan trascendental como necesario, que las obligaciones allí consignadas, guarden consonancia por un lado con las aspiraciones del pretensor, y por el otro, correspondan al saldo efectivamente adeudado por la convocada.

Lo anterior para significar que, sin perjuicio de los poderes oficiosos y de control de legalidad que tiene a su disposición el juez que surte la ejecución y que se consagran, entre otros, en los artículos 48 del CPTSS y 42 y 132 del CGP, **los profesionales del derecho que apoderan a las partes integrantes de la litis, deben permanecer especialmente atentos para elevar de manera oportuna las excepciones de mérito que consideren pertinentes en orden a defender los intereses que le son confiados, puesto que éstos, como conocedores de las lides y materias jurídicas, son los llamados a actuar con la oportunidad y conocimiento requeridos.**

Adicionalmente, con mayor incidencia en la desestimación de la censura, exalta la Sala en primer término que, si bien es cierto, el ejecutante solicitó el pago de la suma de \$ 111.160.760 a título de intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100, no lo es menos que, la suma de \$ 89.687.058 reconocida a la actora por este mismo concepto y en el que la ejecutada radica el pago total de la obligación, fue tenida en cuenta por el *a quo* en las operaciones matemáticas vertidas en el auto refutado (doc.04, carp.01).

Lo anterior termina por explicar la deducción de este guarismo del valor de la obligación reclamada por el ejecutante por el valor de \$ 111.160.760 y se circunscribiera la orden de pago a la diferencia resultante de \$ 21.473.702. En segundo lugar, se destaca que la constitución del título judicial por el valor de las costas liquidadas en primera instancia [20-agos-2021; doc.09, carp.01] tuvo lugar luego de haberse librado la orden de pago [27-jul-2021], por lo que no hay lugar a su exclusión en esta etapa de la contienda judicial y, siendo ello así, el ejercicio ponderativo vertido en esta decisión debe mantenerse invariable.

Bajo ese horizonte y a partir de las anteriores consideraciones legales y fácticas, fuerza concluir que, efectivamente no le asiste razón a la alzada al solicitar se revoque la orden de pago y se extinga la acción ejecutiva, pero sí al cognoscente de primer grado al negar tal solicitud, habida cuenta que las providencias aportadas satisfacen las exigencias formales y sustanciales para tenerse como título ejecutivo, de donde se colige que la decisión opugnada se acompasa con las previsiones contenidas en el canon 100 del estatuto instrumental laboral y en los artículos 422, 430, 442 y 443 del CGP, y es en la etapa de excepciones de mérito donde deberá invocar el cumplimiento oportuno de las obligaciones que se derivan del documento báculo de ejecución; por manera que, sin necesidad de mayores disquisiciones, se impone para la Sala impartir confirmación al proveído materia de alzada.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, y en atención a que el recurso formulado por la AFP PORVENIR S.A. no alcanzó prosperidad, a su cargo se impondrán las costas causada, en atención a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP. De conformidad con el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho para la segunda instancia y en favor de la demandante DORA STELLA ARRUBLA RUIZ, la suma de un salario mínimo legal mensual vigente (\$1.300.000).

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Cuarta de Decisión Laboral,**

4. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto dictado el 27 de julio de 2021 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL promovido por la señora DORA STELLA ARRUBLA RUIZ en contra de la sociedad AFP PORVENIR S.A., según y conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.


SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la AFP PORVENIR S.A., fijándose como agencias en derecho para la segunda instancia y en favor de la señora DORA STELLA ARRUBLA RUIZ, la suma de un salario mínimo legal mensual vigente, equivalente a \$ 1.300.000.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, según lo previsto en el artículo 41 literal c) del CPTSS.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

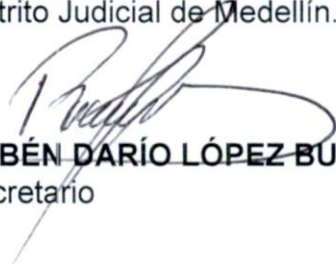

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
Magistrada


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario